

operativizar, acompañar y evaluar. El documento final así lo refleja.

La respuesta a los problemas y necesidades de nuestra sociedad no la deben dar “otros”. Cada uno puede asumir su “respuesta” y hacerse así “responsable”. Eso quedó en el ambiente de los participantes al Congreso, por eso al final afirmamos llenos de confianza en el Dios que nos ama, en Jesús que nos reúne y en su Espíritu que nos entusiasma, que queremos ser luz, levadura y sal para dar respuestas concretas a los “dolores” y “quejas” de nuestra tierra, participando activamente en los espacios privados y públicos disponibles donde podamos ofrecer nuestros aportes (ver documento completo: www.gumilla.org.ve).

Los laicos de la Iglesia Católica venezolana queremos asumir nuestras propias responsabilidades en comunión con nuestros pastores, poner al servicio nuestros dones, cualidades y profesiones en función del bien común y de la justicia social en Venezuela.

Ese fue el mensaje y esa fue la vivencia...por sus frutos se conocerá.

*Ricardo J. Márquez Muskus; Director de Pastoral-UCAB; Participante del VI Congreso

Migración y Libre Comercio

Alfredo Infante*

Después de haber concertado el NAFTA con México y Canadá, y de fracasar en la negociación en Bloque con el resto de los países de las Américas, Estados Unidos ha venido negociando binacionalmente la apertura comercial con los países de América del Sur; Salvador, Chile y Colombia entre otros han concretado tal acuerdo, mientras otros están en plena negociación o en sala de espera. De este hecho, no voy a hacer una valoración desde el punto de vista económico, sino humanitario. Paradójicamente los países que han concertado tales acuerdos y los que quieren ganar la simpatía para hacer currículum que les posibilite tal tratado, han veni-



do endureciendo su política migratoria respecto a otros países del sur. Pareciera que, por la coincidencia entre acuerdo comercial y endurecimiento de las políticas migratorias, Estados Unidos está negociando con los países de América del Sur desde la lógica de “Patio trasero”. La construcción del muro físico del que tanto se ha hablado en los últimos meses, simbólicamente va más allá de sus propias fronteras inmediatas, este muro se expresa también en el endurecimiento de las políticas migratorias Sur-Sur. Sin duda alguna, que estos acuerdos de libre comercio, en cuanto al tema migratorio se refiere, llevan el sello de la paranoia post 11 de septiembre, es decir, estas negociaciones están articuladas por la agenda de Seguridad Nacional.

Mientras EE.UU. mantiene una ofensiva comercial exitosa llegando binacionalmente a acuerdos de libre comercio con un número significativo de países de América Latina, internamente desde mayo de 2005 hasta hoy, hay un candente debate en el Congreso y en la sociedad sobre las políticas migratorias. En mayo de 2005, dos senadores presentaron un anteproyecto de ley que proponía un proceso para legalizar a los alrededor de 11 millones de personas que se encuentran ya en los EEUU sin visas actualizadas, ni documentación. Esta propuesta exaltó los ánimos de los más conservadores quienes vieron en dicho articulado un riesgo para la seguridad de la nación e hicieron una contrapropuesta que, a diferencia de la anterior, criminaliza la inmigración y clama por un cierre de las fronteras. Esta última propuesta es la que está teniendo mayor avance en el Congreso.

Uno de los puntos álgidos del debate es: ¿qué hacer con los 11 millones de inmigrantes irregulares que viven en los EE.UU.?

La derecha apoya el proyecto de ley HR 4437, “The border protection, Anti-terrorism, and Illegal Immigration Control Act”, que fue pasado por la Cámara de representantes el 16 de diciembre de 2005. Este proyecto criminaliza la inmigración irregular y criminaliza a las ONGs y a instituciones que como la Iglesia atienden a esta población. También criminaliza a los empleadores de mano de obra irregular. Este sector considera que cualquier

otra solución sería una Amnistía, y el crimen ha de ser castigado. Por otro lado, están de acuerdo con poner una serie de obstáculos para la naturalización de los inmigrantes regulares residenciados en el país.

Los Sectores más progresistas, interpretados en cierto sentido, por la propuesta de McCain Kennedy proponen crear pasos para penalizar, sin criminalizar, a aquellos que infringieron la ley, se trataría de penas menores y se les permitiría radicarse en los EE.UU. Estos valoran el aporte de los migrantes a la economía nacional y reconocen el quiebre económico que causaría una repatriación masiva.

Los sectores radicales de derecha han presionado al gobierno de Bush, a raíz de la tragedia terrorista del 11 de septiembre de 2001, a que exija poder identificar a cada persona que se encuentra en territorio nacional por lo que consideran conveniente crear el muro en la frontera con México y criminalizar y expulsar a los 11 millones que ya viven en Estados Unidos. Desde la perspectiva de este sector el inmigrante irregular ha de ser tratado en la categoría de terrorista que atenta contra la seguridad nacional.

Para enganchar en su propuesta a los sectores populares, la derecha viene usando la clásica falacia que afirma: “los inmigrantes le quitan el empleo a los sectores populares norteamericanos”. Actualmente se emiten 5.000 visas anuales para trabajadores laborales en un mercado que demanda alrededor de medio millón de personas, por lo que sin duda alguna, la diferencia es cubierta por la mano de obra irregular. Pero la realidad es que el ciudadano popular norteamericano no tiene interés en tomar el tipo de trabajo que realizan la mayoría de los inmigrantes y la economía se está apoyando en gran parte en la mano de obra del inmigrante irregular. Hipocresía del sistema!

En este contexto la Iglesia Católica y en ella la Conferencia de Provinciales de la Compañía de Jesús, viene desarrollando desde Mayo de 2005 hasta el día de hoy, una Campaña llamada “Justicia para los Inmigrantes.” Las metas de esta Campaña son:

- Sensibilizar a la sociedad y dar a conocer los principios de reforma que la Iglesia propone.

- Abogar por una reforma legislativa a favor de la población inmigrante
- Trabajar para que en términos de políticas públicas esta reforma beneficie directamente a la población meta.

Los principios de la Iglesia para enfrentar este desafío son:

- Una amplia legislación que incluya residencia permanente de los indocumentados de todas las nacionalidades.
- Reforma del sistema migratorio, basado en peticiones familiares, que permita que los miembros de las familias se reúnan con sus seres queridos en los EE.UU.
- Garantizar vías legales para que los inmigrantes entren al país y trabajen de manera ordenada, segura y humana.
- Abandono de la estrategia de aplicación del “bloqueo” de la frontera.
- Restauración del debido proceso para los inmigrantes

Todo este recorrido refleja la riqueza de un debate sobre un tema muy actual como lo es el fenómeno de la migración en un mundo globalizado. Una visión de derecha xenofóbica posicionada desde la perspectiva de la Seguridad Nacional contrastada por sectores progresistas que plantean la inclusión desde una perspectiva de solidaridad humanitaria y de reconocimiento del otro.

Pero volvamos a la paradoja inicial, porque resulta que lo que al interno de los Estados Unidos está siendo un candente debate –donde sin duda alguna la derecha parece prevalecer– no ha sido muy debatido al interior de los países latinoamericanos que han negociado bilateralmente el Tratado de Libre Comercio. Lamentablemente ya hay indicadores claros de que el muro que se discute en el Congreso de los EE.UU, ya se ha ido construyendo en las fronteras Sur-Sur, no con piedras sino con deportaciones masivas de inmigrantes. Es aquí la gran paradoja: se abren las fronteras al comercio y se cierran a las personas.

*Director para América Latina del Servicio Jesuita a Refugiados.